

**09**

## **Los pobladores de los territorios olvidados**

**LUIS CAMARERO**

**Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)**

El proceso de modernización primero y de globalización después han puesto en cuestión los modelos de asentamiento y de distribución demográfica sobre el territorio que venían determinados por la organización de la subsistencia vinculada a la producción agropecuaria, donde población y territorio venían a ser coincidentes. El desarrollo progresivo de las economías del conocimiento ha modificado los límites territoriales en los que se desenvolvían las sociedades rurales. El fuerte envejecimiento de la población está transformando las necesidades y las lógicas de asentamiento de nuestras sociedades, que estaban organizadas en base a la obtención y explotación de recursos. Estamos ante una profunda transformación del modelo de territorio. El retiro —como ejemplo de la sociedad del bienestar— y el turismo —como ejemplo de la sociedad de consumo— son dos vectores fundamentales en la modelación de nuestro territorio y de nuestro sistema de asentamientos. Hay un cambio y un desplazamiento de la importancia que tienen los lugares.

En el caso de los habitantes rurales, esta transformación del modelo de territorio acentúa aún más los efectos de la propia crisis de bienestar que experimentan las sociedades europeas en su adaptación permanente a los cambios demográficos, incrementa el impacto de las continuadas crisis —financieras, sanitarias y bélicas—, y amplifica las consecuencias de los vientos que nos acercan hacia modelos neoliberales de gestión y diseño de políticas públicas.

Bajo esta mirada de tendencias de adaptación socio-territorial, el texto hace un recorrido por las líneas de cambio que experimentan los habitantes rurales en sus condiciones de vida, se acerca a las fuentes del creciente malestar, y aborda una reflexión sobre la condición y ciudadanía rural.

## La moderna cuestión rural

La cuestión rural ha sido habitualmente tratada como una cuestión de desarrollo económico. El proceso de desagrarización que se produce durante la segunda mitad del siglo xx traslada los debates políticos sobre la propiedad de la tierra —que centraron los problemas sociales del siglo xix y primera parte del xx— al territorio como fuente de producción y progreso. El pensamiento hidrológico «agua, carreteras y escuelas» de Joaquín Costa ejemplifica esta idea (Mateu, 2002).

El proceso de éxodo rural —la cara A de la modernización— centra el debate rural en el atraso económico. El problema de las áreas rurales comienza a definirse respecto a su desconexión productiva y falta de rendimiento, que se justifica en términos de incapacidad de las poblaciones rurales para modernizarse

e integrarse en las economías que no tienen base agraria. «Menos agricultores y mejor agricultura» proclamaba Cavestani (1955), ministro de Agricultura y artífice del Plan Badajoz.

La cara B del proceso modernizador es la desagrarización. Bajo su influjo, las políticas de la Comunidad Económica Europea y las políticas de desarrollo rural —ya en el seno de la Unión Europea— han dirigido la transformación agro-rural. Agricultura y ruralidad son un referente de las políticas públicas europeas desde mediados de los 80, pero, hoy, después de más de cuatro décadas de desarrollo rural, dejan una fotografía muy desigual en la que la despoblación y el malestar parecen generalizados en la Europa no metropolitana.

En 2022 la PAC supuso el 33,1 % del presupuesto de la UE. El denominado segundo pilar de medidas dedicadas al desarrollo rural supuso el 23,2 % de la PAC (Comisión Europea) y a esta cifra habría que añadir la aportación que hicieron los Estados, dado que se trata de programas en cofinanciación. Del conjunto del presupuesto de la UE, alrededor del 8 % del total fueron ayudas a programas de desarrollo, y uno de cada 3 euros fueron a la actividad agraria.

Estas cifras, que han sido aún mayores en ejercicios anteriores, muestran el importante esfuerzo que se ha realizado para mejorar la capacidad productiva de los territorios rurales y dejar atrás la crisis de la modernidad en los lugares rurales. Ahora bien, a pesar de la inversión y del éxito agroambiental de las políticas públicas, las poblaciones rurales han vuelto a la agenda como problema persistente, ya en términos de problema secular.

El salto a candidatura al Congreso de Teruel Existe en 2019 —dos décadas después de su fundación como plataforma cívica— y la constitución como partido político de la plataforma España Vacía simbolizan el malestar rural. Un malestar que estas organizaciones expresan como resultado de un modelo de desarrollo extractivista e injusto.

Llegados aquí al descontento y después de asistir a un proceso de modernización y de fuerte inversión en políticas públicas sobre las áreas rurales, la pregunta resulta obligada: ¿en qué medida la suposición que subyace al desarrollo de esa ley simple, que asegura que el crecimiento económico deriva en bienestar, es cierta? Como ha señalado Amartya Sen (2000): «el desarrollo tiene que ocuparse más de mejorar la vida que llevamos y las libertades de que disfrutamos».

Este texto quiere mirar hacia otro lado, hacia la falta de comprensión que las políticas de desarrollo rural han tenido, primero, sobre el funcionamiento espacial de los procesos económicos y, segundo, en el olvido que han experimentado los habitantes rurales para el conjunto de las políticas no agrarias respecto a sus condiciones de vida.

## El giro territorial en los estudios rurales

Distintas tradiciones académicas han venido relatando la importancia de los procesos de desarrollo regional en la generación y transmisión de desigualdades. Las desigualdades no son necesariamente un producto de las sociedades que las soportan. Hay desigualdades sociales que vienen producidas por sistemas de apropiación localizados. Frente a la idea de la desigualdad rural-urbana basada en el progresivo distanciamiento que la modernidad producía, la perspectiva del giro territorial viene para decirnos que es una desigualdad sistémica, fruto de un modelo de desarrollo que se asienta precisamente mediante el olvido de unos lugares para construir otros.

Esta idea se puede rastrear, en su germen, a partir de los trabajos de Wallerstein (1974) y su exposición sobre la emergencia de las *Economías-Mundo*, sistemas espacializados de organización socioeconómica que se extenderán de forma global definitivamente después de la segunda guerra mundial. Las economías-mundo son nuevos objetos<sup>1</sup>, que se soportan por la lógica de la división regional del trabajo originada en la dualidad colonia-metrópoli, que reproduce y separa territorialmente los procesos de extracción y consumo. Al igual que la división social del trabajo que definió Durkheim (1982: e.o. 1893), donde el crecimiento de la especialización produce la interdependencia entre los miembros y conforma las sociedades orgánicas, los territorios también se van diferenciando y se hacen interdependientes a través de cadenas desiguales de extracción de valor mientras conforman sociedades globales.

Los territorios, entendidos como el conjunto de las personas que en ellos residen, están sometidos a grandes procesos globales y adoptan respuestas localmente diversas para insertarse o engancharse a dichas corrientes. Las respuestas locales suponen una continuada fractalidad territorial, en la medida en que se producen discontinuidades o fracturas espaciales; los lugares adyacentes experimentan distintos efectos frente a procesos idénticos. Veltz (1996) utiliza el término de *Economía del archipiélago* para mostrar el funcionamiento de los procesos económicos que funcionan en red conectando polos de desarrollo entre sí mientras dejan en los intersticios lugares alejados y apartados de los flujos económicos. El trabajo de Veltz nos permite comprender la diversidad rural y la conformación de territorios híbridos: lugares en los que la población no necesariamente guarda relación con la actividad y los flujos económicos que en ellos se desarrollan.

---

<sup>1</sup>Objetos-mundo, objetos mensurables a nivel planetario y por lo tanto sin separación entre objeto y sujeto (Serres: 2007).

Pero no solo la producción modela el territorio. Como señala Soja (2010) el consumo y la cultura también intervienen en la conformación de los modelos territoriales. La *nueva ruralidad* (Grammont, 2004) es un ejemplo paradigmático de la fuerza que las economías post-productivas tienen para comprender nuestro territorio, pero también las cadenas globales de cuidados (Hochschild, 2000). La idea de Soja es que las desigualdades sociales no son exclusivamente económicas, sino que también son producto de los procesos de apropiación y de producción del espacio. Y en ese sentido las desigualdades territoriales son socialmente producidas y, en consecuencia, aboga por la justicia espacial rompiendo con el falso determinismo de que somos producto de nuestro lugar. La teoría del desarrollo rural suponía precisamente lo contrario.

Son los propios sistemas sociales los que producen *territorios olvidados*. La etiqueta la introduce Rodríguez-Pose (2017) para explicar el funcionamiento de nuestro modelo de desarrollo económico de aglomeración. La concentración de recursos, mano de obra, energía, talento y consumo abarata costes por el efecto de escala. Este modelo de crecimiento es territorialmente desigual y genera externalidades. Entre ellas que muchos territorios quedan fuera de los flujos económicos, de transporte y de innovación. Es el proceso que Khün (2015) denomina *periferialización*. En definitiva, lugares que quedan alejados de las economías del conocimiento. Utilizando la terminología de Soja podríamos decir que la periferia, en la que se sitúan buena parte de los lugares rurales, es resultado de una relación social con implicaciones espaciales.

El giro territorial nos permite comprender la situación de las áreas rurales de forma distinta. Hasta ahora la reducción del problema rural a la cuestión del desarrollo en reducción económica se basaba en la suposición de la propia incapacidad que experimentan las poblaciones rurales, lastradas en prácticas premodernas y tradicionales, para liderar procesos de transformación e innovación. La comprensión espacial de los procesos socioeconómicos señala sin embargo que la situación de declive es resultado del modelo de crecimiento y desarrollo económico del conjunto de la sociedad.

Es en este contexto donde debemos situar la reflexión sobre el genérico término de la despoblación. La despoblación no es sino un reflejo de un modelo de desarrollo desigual en términos socioespaciales.

### **Más allá de la despoblación: una aproximación a la población rural**

La población rural son las personas que viven en la España de pueblos, lugares, aldeas, parroquias... Alrededor de la quinta parte de la población de nuestro país reside en municipios menores de 10.000 habitantes, generalmente considerados en conjunto como rurales, y cuyos términos territoriales ocupan el 80 % de la

extensión total. La España rural tiene una densidad inferior a 25 hab./km<sup>2</sup>, y en aproximadamente la mitad de los municipios esta cifra baja de los 12,5 hab./km<sup>2</sup>, valor, este último, que coincide con el límite que emplea la UE para definir baja densidad. Estos datos muestran que, comparativamente con la media europea, nuestro país se caracteriza por ser un territorio de baja densidad. Si los valores absolutos de población rural según el tamaño de municipio pueden parecer reducidos<sup>2</sup>, la percepción que tenemos en nuestro país y nuestra consideración como habitantes rurales es significativamente mayor, y para nada reducida. Cuando se pregunta a la población española que describa su lugar de residencia, el 30 % —alrededor de uno de cada tres— declaran residir en un área rural (Eurobarómetro 491, Comisión Europea). A pesar de la idea generalizada de despoblación, la población rural es numéricamente importante, y en términos relativos sus valores comparados con la población urbana no quieren decir que la población rural haya desaparecido, sino que el hábitat rural de baja densidad es una característica fundamental de nuestro modelo territorial.

Los datos nos informan de nuestro modelo de hábitat. Nuestro modelo es un modelo de baja densidad y este modelo no es nuevo. Nunca hemos llegado a las elevadas densidades que experimentan los territorios del centro de Europa. La falta de reconocimiento de este hecho, de nuestra baja densidad, y de sus importantes efectos en el mantenimiento de la calidad ambiental, alimentaria, de diversidad cultural y de estilos de vida altera el enfoque de la despoblación. Hay una importante confusión entre despoblación y baja densidad, no son sinónimos.

Precisamente el modelo de baja densidad hace que las sociedades rurales hayan venido elaborando sistemas de gobernanza adaptados a dicho modelo. Los concejos abiertos, los comunales, las formas de gobernanza participativa y directa que tienen una gran importancia en la gestión territorial y patrimonio natural no tendrían sentido en un contexto de alta densidad. El territorio está cosido por una red política de gran valor a través de ayuntamientos, concejos e infinidad de instituciones locales. En el contexto del desdoblamiento, esa falta de reconocimiento tanto de la población como de las instituciones propias llega al extremo de clamar por la fusión de los pequeños ayuntamientos, arguyendo lógicas de demanda agregada de prestación de servicios. Se olvida la función socio-territorial de custodia, organización y preservación que cumplen las instituciones políticas a escala local. La amenaza al municipalismo es el talón de Aquiles de la supervivencia política rural. La supresión de ayuntamientos es la mejor forma de entregar el territorio a grandes operadores.

---

<sup>2</sup>El 11 % de los españoles vive en municipios menores de 5.000 habitantes y el 19 % en los de menos de 10.000 habitantes. Padrón Continuo, INE. Datos a 1 de enero de 2021.

La población rural es muy diversa. A pesar de los imaginarios que preexisten, no depende de la actividad agraria. La agricultura ofrece ocupación a la cuarta parte de los habitantes de municipios muy pequeños. Para el conjunto de municipios menores de 10.000 solo lo hace para el 12 % de la población activa<sup>3</sup> (tabla 1). Que proporcionalmente haya más agricultores en municipios pequeños no impide que el peso de los activos agrarios termine concentrándose en municipios de mayor tamaño. Según el registro de cotizantes de la Seguridad Social cuyos datos se exponen en la tabla 1, aproximadamente 1 de cada 2 activos agrarios reside en municipios mayores de 10.000 habitantes.

**Tabla 1.** Afiliados a la rama agraria según tamaño de municipio de residencia.

		Afiliados agricultura	Total de afiliados S.S.	Proporción agricultores	Peso de los agricultores
Tamaño de municipio	<500	64.165	250.792	25,6 %	8,8 %
	500-1000	44.261	228.947	19,3 %	6,1 %
	1000-2000	61.579	421.095	14,6 %	8,4 %
	2000-5000	113.247	1.005.576	11,3 %	15,5 %
	5000-10000	92.015	1.312.266	7,0 %	12,6 %
	>10000	355.552	16.576.336	2,1 %	48,7 %
	<b>Total</b>	<b>730.819</b>	<b>19.795.011</b>	<b>3,7 %</b>	<b>100,0 %</b>

**Fuente:** Registro cotizantes seguridad social. Junio-2022. Elaboración propia.

La agricultura no solo ha perdido efectivos, sino que, y ahí está la cuestión que define la desagrarización, ha perdido su centralidad como eje organizador de la vida rural. La estructura social, los ciclos de organización temporal y otros elementos culturales e identitarios quedan cada vez más alejados de la actividad agropecuaria. La pérdida de esta centralidad viene de la reducción como fuente de subsistencia para los propios habitantes rurales, y además por la disolución progresiva de su carácter de actividad familiar. Los datos (tabla 2) muestran cifras muy reducidas de hogares en los que al menos dos miembros trabajan en agricultura —y no son asalariados—. La actividad agraria es una actividad netamente asalariada, 2 de cada 3 hogares que mantienen activos en el sector están compuestos por asalariados. En términos puros habría alrededor de 33.000

<sup>3</sup> La tabla 1 señala un total de 375 mil cotizantes agrarios para un total de 3,2 millones de cotizantes en ese estrato de tamaño, lo que supone el 11,7 %.

hogares en España donde al menos hay dos miembros en posición de agricultura familiar (podríamos sumar otros mil hogares mixtos en donde además hay algún otro miembro asalariado). Si observamos los datos hay alrededor de 200.000 hogares que, en la práctica, son considerados como explotaciones familiares, pero en los que solo un miembro del hogar está dedicado a la actividad agropecuaria<sup>4</sup>.

**Tabla 2.** Composición de los hogares según su participación en la actividad agraria y composición. Datos en miles.

Hogares no Agrarios				18.347
		Sin otros miembros asalariados agrarios	Con algún otro miembro asalariado agrario	Todos
Hogares Agrarios	Un solo activo en posición familiar	196	12	208
	Dos o más activos en posición familiar	33	1	34
	Solo asalariados		423	423
	<b>Total</b>			666

**Fuente:** Media EPA años 2021-2022. INE. Elaboración propia.

Las cifras hablan por sí solas. Estamos ante una ruralidad multifuncional —que guarda progresivamente poca relación con la agricultura en términos de ocupación— pero que también es muy dependiente de la movilidad. El 88 % de los residentes rurales —en municipios menores de 10.000 habitantes— que no tienen ocupación agraria, no necesariamente trabajan en el mismo lugar de residencia. Como podemos apreciar (tabla 3), más de la mitad de los ocupados en dichos municipios se desplazan diariamente fuera de la localidad para desarrollar sus actividades de subsistencia.

<sup>4</sup> Las cifras de hogares agrarios pueden parecer muy reducidas si se emplean las cifras del Censo Agrario. El Censo de 2020 indica que hay cerca de 800.000 explotaciones cuyo jefe de explotación es el propio titular o su cónyuge. Ahora bien si filtramos el número de explotaciones y descontamos todas aquellas explotaciones en las que el jefe de explotación tiene más de 65 años (unas 325.000) —criterio que utiliza la EPA para definir población activa— y todas aquellas con un rendimiento económico insuficiente para centrarnos en aquellas con una producción estándar total (PET) superior a los 8.000 euros, valor que difícilmente puede garantizar la autonomía del hogar (son aproximadamente de 660 euros al mes), el número de explotaciones queda en unas 260.000, cifra muy cercana a la que ofrece la EPA y que hemos considerado como hogar agrario (208.000+34.000=242.000).

**Tabla 3.** Porcentaje de ocupados que se desplazan diariamente fuera del municipio de residencia según tamaño de municipio. 2022.

< 500 hab.	49,6 %
501-2.000 hab.	53,8 %
2.001-5.000 hab.	57,0 %
5.001-10.000 hab.	58,9 %
Total <10.000 hab.	56,4 %

**Fuente:** EVR-2022. INE. Elaboración propia.

La diversidad de actividades que desarrollan los habitantes rurales es posible por la importancia que tiene el *commuter*. Pero además la movilidad permite el acceso a los distintos servicios comerciales y también públicos del bienestar. El proceso de modernización de la sociedad española experimentado durante la segunda década del siglo xx tiene desde la mirada de las áreas rurales dos caras: la desagrarización y el éxodo rural, procesos ambos que han transformado radicalmente las formas de vida rural. Sus economías son dependientes de los mercados de trabajo extralocales y su composición demográfica se ha visto profundamente alterada por los efectos de migraciones selectivas generacionalmente. Pero además, y la intensidad del *commuter* es el indicador más claro, las áreas rurales han quedado en una posición crecientemente dependiente.

En este sentido hablamos de brecha rural-urbana como un conjunto de procesos de declive que se retroalimentan (Camarero y Oliva, 2016). En la próxima sección se avanza en la combinación que se establece entre desequilibrios sociodemográficos y periferia.

## La lógica del vacío rural: desequilibrios y periferias

Bajo la idea de despoblación se esconde un mecanismo de desigualdad complejo. Como hemos indicado, el modelo de desarrollo basado en la concentración de recursos, mano de obra y conocimiento en centros urbanos condena a las áreas rurales a padecer el proceso de periferalización. Las áreas rurales se encuentran crecientemente apartadas de los flujos económicos, de innovación y de transporte. Se convierten en lugares alejados del centro de las decisiones sociales mientras experimentan un proceso de vaciamiento que podemos resumir como extractivismo vital. Como recuerda Rodríguez-Pose (2017), mientras asumimos con naturalidad que la contaminación ambiental es un mal de nuestro modelo de desarrollo, omitimos la falta de cohesión territorial que es también producto

de dicho modelo. Las diferencias urbano-rurales son producidas por nuestro modelo de desarrollo, por ello exigen una atención del estado. Como indican Molina, Hernando y Pérez (2022), estamos ante una crisis de territorios.

Como resultado del proceso de concentración —éxodo rural— las poblaciones rurales han venido experimentando situaciones de declive demográfico. El despoblamiento rural hace referencia a la incapacidad que tienen las áreas rurales para mantener la sostenibilidad necesaria de cara al desarrollo de las actividades económicas, de reproducción y de cuidados. El fuerte sobre-envejecimiento de las áreas rurales tensiona las cadenas de cuidados.

El tabla —gráfico 1— permite comprobar los efectos a largo plazo del éxodo rural. En la pirámide por sexo y edad de 2003 nos encontramos con una población rural desequilibrada. Se observa claramente la ausencia de una generación —aproximadamente quienes tenían entre 40 y 65 años— que se corresponde con los nacidos entre la Guerra Civil hasta mediados de los 60<sup>5</sup>. Es la generación ausente que protagoniza la migración campo ciudad y la transformación de España en un territorio urbano-industrial. A principios del siglo XXI su falta repercute en el envejecimiento, en la falta de población joven que hubiera nacido si sus padres no hubieran emigrado. A pesar del fuerte desequilibrio, a principios del siglo XXI hay un grupo central —que se corresponde con los nacidos entre los 60 y mediados de los 70<sup>6</sup>— que actuará como generación soporte (Camarero et al., 2009): serán por su edad —entre 30 y 45 años— el grupo activo, dedicado al cuidado de mayores y de menores, además de dinamizadores de la vida cultural.

Sin embargo, como podemos comprobar en el gráfico, dos décadas más tarde —en 2022— la generación soporte ha desaparecido. Si nos fijamos en la pirámide actual, la generación soporte ha entrado en edades de jubilación, y ha quedado ya totalmente invertida, las generaciones son constantemente decrecientes. Este proceso de pérdida de la generación soporte coincide con el despuntar del debate sobre el despoblamiento. Aquí reside la lógica de la despoblación. No se trata de pérdida de población sino de pérdida de equilibrios demográficos. De hecho, España en conjunto ha estado perdiendo población también durante los años de la publicación de *La España Vacía* (Del Molino, 2016). Durante el

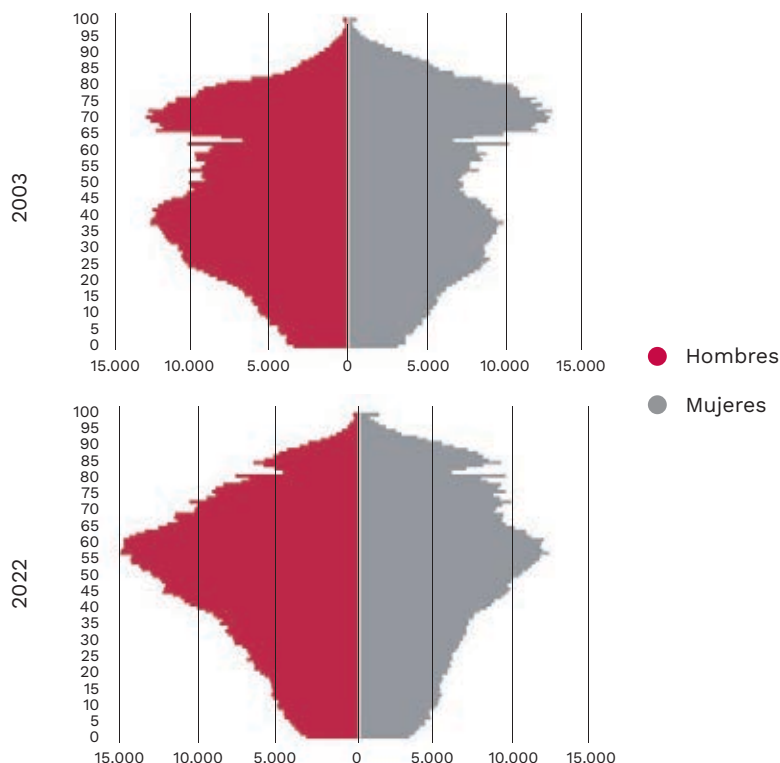
---

<sup>5</sup> Se observa un hueco profundo en las edades entre quienes tienen 62 y 65 años, que fue la generación más reducida por la caída de la natalidad durante el periodo bélico. El límite superior lo compone la generación del baby boom. 1964 fue el año de mayor número de nacimientos, en el gráfico tienen 38 años.

<sup>6</sup> La denominada crisis del petróleo de 1973 y el periodo de transición en España marcan el punto de inflexión de la fecundidad y de la contracción de forma significativa de la natalidad.

periodo de 2012 a 2017 la población española disminuyó en términos absolutos con una tasa del 1,46 %. En la actualidad hay también pérdida absoluta, las últimas cifras oficiales de población de a 1 de enero de 2022 son inferiores a las alcanzadas en 2020, si bien para este año debería considerarse el efecto extraordinario en mortalidad producido por la pandemia.

**Gráfico 1.** Estructuras demográficas de los municipios menores de 1.000 habitantes.



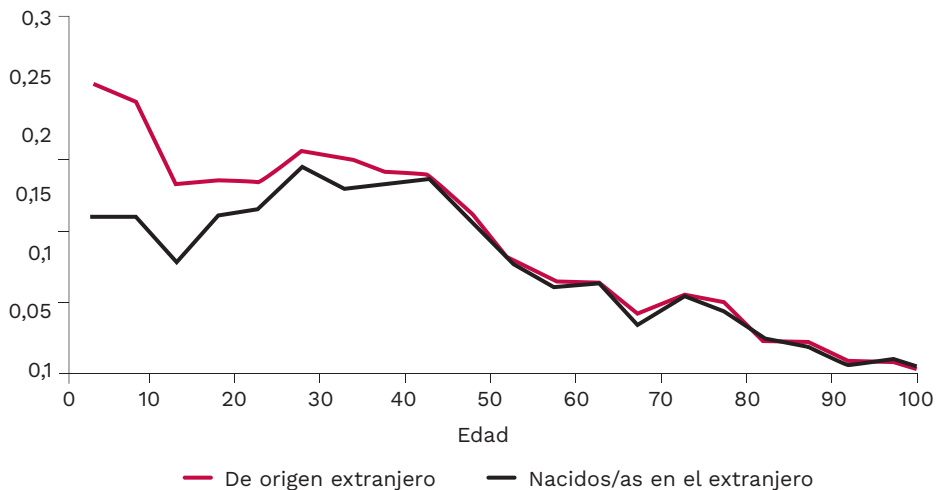
**Fuente:** Padrón Continuo, INE. Población a 1 de enero. Elaboración propia.

La población rural es una población fuertemente envejecida, más del 10 % tienen más de 80 años, con una proporción de personas dependientes muy elevada. Las regiones del oriente situadas en la Raya, tanto de España como de Portugal, concentran las mayores tasas de envejecimiento de Europa. La centralidad urbana de nuestro modelo de desarrollo provoca que las áreas rurales sean incapaces para retener población joven y también para atraer talento. La falta de jóvenes, la falta de atractivo para atraer talento en el contexto de fuerte envejecimiento alcanza tal magnitud que hay lugares en que no existe capital humano suficiente para desarrollar proyectos y acogerse a líneas de emprendimiento e innovación.

Los desequilibrios de la población rural afectan también a la composición por género. Las pirámides del gráfico 1 deberían reflejar una mayor simetría entre hombres y mujeres. Se comprueba fácilmente cómo los hombres llegan al límite izquierdo de la figura mientras las mujeres quedan a distancia considerable, siendo la escala simétrica. El éxodo rural fue protagonizado antes por las mujeres que por los hombres, pero ahora también las jóvenes siguen emigrando con mayor intensidad que los jóvenes. La masculinización rural delata la persistencia continuada de procesos que dificultan la igualdad de género en términos que constituyen un hándicap real para la permanencia de la población joven pero también condicionan el atractivo que pueden tener las áreas rurales. Distintos estudios (Camarero, Cruz y Oliva, 2016) han mostrado el efecto que tienen mercados de trabajo restrictivos en cuanto a oportunidades de desarrollo profesional para las mujeres, así como las interferencias entre movilidad, cuidados y conciliación que ellas experimentan de forma claramente desigual respecto a los hombres.

La despoblación, centrada en el número, ha evitado la reflexión sobre los desequilibrios y el impacto que tanto género como generaciones tienen en la sostenibilidad social de las áreas rurales. La fuerza de la idea de despoblación en su idea de ocaso ha omitido también el reconocimiento de la creciente diversidad social que experimentan los pequeños núcleos. La población rural es cosmopolita, cerca del 15 % de los grupos en edad intermedia —entre 30 y 45 años— han nacido en el extranjero (gráfico 2).

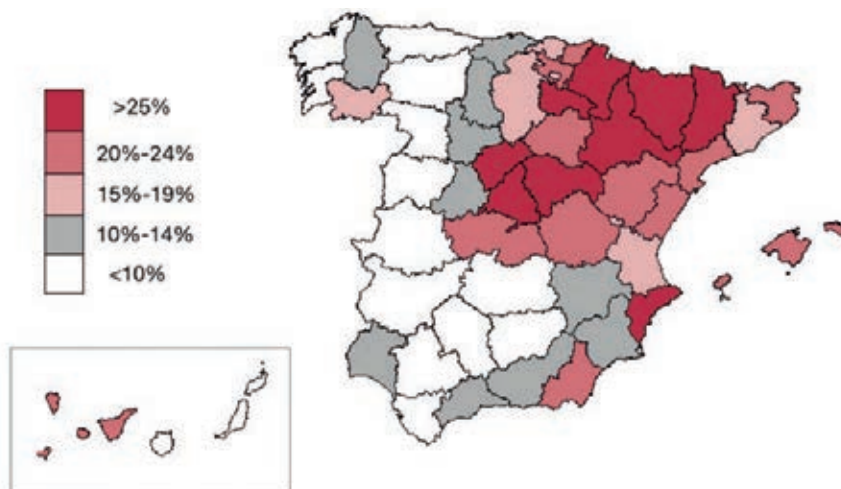
**Gráfico 2.** Proporción de habitantes rurales por procedencia según edad. Municipios menores de 5.000 habitantes. 2020.



Datos a 1 de enero de 2020.

**Fuente:** Encuesta Continua de Población. INE. Elaboración propia.

**Mapa 1.** Porcentaje de población nacida en el extranjero entre 25 y 39 años residente en municipios menores de 5.000 habitantes por provincia de residencia.



**Fuente:** Padrón continuo a 1 de enero de 2022. INE. Elaboración propia.

Como podemos apreciar, al observar el mapa 1, en muchas regiones la importancia numérica de la población que ha nacido en el extranjero es relevante. El impacto que este grupo de nuevos residentes tiene en las poblaciones de pequeño tamaño es por mero contraste notable. Los datos muestran la importancia que tiene la población extranjera para las áreas rurales situadas en el cuadrante noreste peninsular. Visto en detalle permite apreciar dos focos en la España interior donde se alcanzan valores de presencia de nacidos en el extranjero en el grupo de edad central superiores a la cuarta parte de la población. Destaca el curso medio del Valle del Ebro, región centrada en actividades agrarias de regadío, pero también de transformación —cuarta gama, vitivinícola— con demanda intensa de mano de obra y en un contexto de fuerte vaciamiento poblacional cuya vitalidad tiene carácter foráneo. El envejecimiento de las áreas rurales también contribuye en el contexto de la economía de cuidados a la llegada de población extranjera. En el Ebro, la Rioja lidera el indicador: el 30,6 %, casi uno de cada tres de esta generación, es extranjero. El otro foco lo conforma el eje metropolitano madrileño con su extensión sobre las provincias limítrofes de Guadalajara y de Segovia, ruralidades de pueblos muy pequeños. Pueblos que han concentrado población recién llegada, en muchos casos, debido a los menores precios inmobiliarios respecto al centro metropolitano y, en otros, gracias a su vinculación a actividades industriales en exiguas cabeceras comarcales, así como a las actividades de cuidados —en territorios envejecidos— y tareas agrícolas y agroindustriales.

Si pensamos en el futuro inmediato el efecto que tiene el cosmopolitismo es enorme. Más de la quinta parte de los nuevos rurales —quienes hoy tienen menos de 10 años— bien han nacido en el extranjero o bien lo han hecho sus madres. El gráfico 2 es claro en este sentido. Las nuevas generaciones de rurales no son necesariamente hijos o hijas del lugar.

A pesar de la contundencia de los datos, la percepción de las áreas rurales como lugares inmóviles es dominante. Las investigaciones realizadas ponen el énfasis en el acogimiento precario de las personas que proceden del extranjero y, sobre todo, en la falta de reconocimiento del importante valor que la diversidad cultural aporta como motor de las políticas de desarrollo. Los extranjeros, los inmigrantes, están ausentes como sujeto de la vida local y del desarrollo (Camarero y Sampedro, 2019).

Las periferias reflejan el conglomerado de desequilibrios demográficos que alimentan los procesos de declive y experimentan la negación de la diversidad que albergan en la medida que concentran un cosmopolitismo precario (Woods, 2018). Las periferias también se caracterizan por la falta de accesibilidad, por el alejamiento a servicios privados y también públicos. La brecha rural se alimenta por el círculo vicioso que la falta de población produce en la oferta de servicios, y la consecuente falta de servicios que produce el declive sociodemográfico.

Sirva como ejemplo de las dificultades de accesibilidad los datos que refleja la tabla 4. En dicha tabla observamos, por ejemplo, que casi el 30 % de la población rural declara tener serias dificultades de acceso a un servicio con demanda diaria como son las tiendas de alimentación. Los datos de la tabla 4 señalan las dificultades en acceso público a distintos servicios, los valores son elevados, y muestran, sin lugar a duda, la importancia que tiene la demanda del vehículo privado como fuente para el desarrollo de la vida rural.

**Tabla 4.** Proporción de habitantes rurales que señalar tener dificultades para acceder a distintos servicios. 2021.

Supermercado más cercano	29,9 %
Consulta de su médico/a	26,1 %
Oficina de correos local	25,8 %

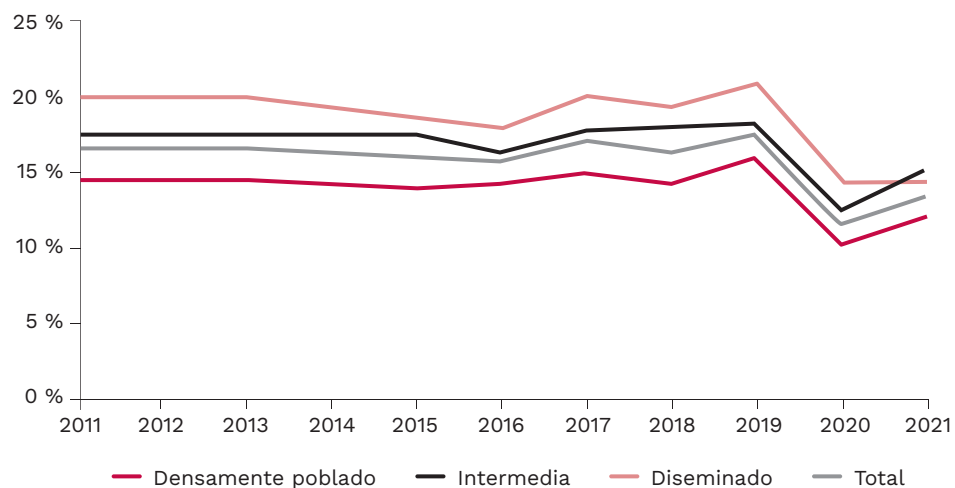
**Fuente:** Eurobarómetro 491, 2021. Comisión Europea. Elaboración propia.

De forma expresiva podemos decir que los habitantes rurales tienen trabajo y disfrutan de servicios en la medida en que pueden moverse. Ahora bien, la demanda de movilidad alimenta nuevos procesos de desigualdad que ahondan en la brecha rural.

Las poblaciones rurales han tenido que desarrollar una alta capacidad de movilidad —centrada en el automóvil privado— para procurar sus medios de subsistencia y provisión de mercancías. Y estas exigencias obligadas de movilidad diferencian la población. Mientras hay grupos que a través de la movilidad pueden integrarse en procesos laborales y acceder a recursos y servicios, hay otros grupos que en el contexto de la dependencia que tienen las áreas rurales de la auto-movilidad privada quedan inmóviles. Mayores, pero también adolescentes, o inmigrantes sin licencia de conducir, amén de quienes no pueden adquirir o hacer frente a los costes de un automóvil, son grupos que resultan muy vulnerables por su inmovilismo. La movilidad se ha convertido en una característica básica para garantizar la subsistencia de las poblaciones rurales.

Para mostrar la brecha urbana-rural podemos analizar la diferencia en términos de esfuerzo económico que realizan los habitantes rurales —gráfico 3—. Como puede apreciarse a simple vista, la diferencia en la proporción que los gastos de movilidad suponen en términos de renta disponible entre áreas rurales y urbanas es notoria. Los datos para el año 2019 muestran que los hogares residentes en municipios menores de 10.000 habitantes destinaron a transporte y movilidad el 18,3 % de su renta disponible, mientras que para los mayores de 100.000 habitantes este rubro supuso el 13,2 %. Los datos señalan que residir en pequeños municipios tiene un coste de 1,38 veces el experimentado por los hogares de grandes municipios.

**Gráfico 3.** Proporción del gasto en transporte sobre renta disponible de los hogares nucleares por grado de urbanización. Periodo 2011-2021.



**Fuente:** Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. Gastos de transporte son los incluido en el rubro 7 de la ECOICOP. Hogares nucleares compuestos por una pareja y menores de 16 años. Elaboración propia.

Estos datos resultan aún más extremos para ciertos grupos familiares. Por ejemplo, los hogares nucleares, aquellos compuestos por una pareja con hijos menores de 16 años, llegan a superar en 2018 el 20 % de su renta en gastos en transporte (tabla 5). El gráfico 3 nos permite detallar que la diferencia rural-urbana en gastos de transporte es constante. Observamos que justo antes de la pandemia, cuando empieza a revertir el efecto que dejó la crisis de 2008 en el dinamismo económico y se experimenta cierto vitalismo demográfico, los costes de transporte crecen y también el diferencial rural-urbano. Los últimos años de la serie muestran el efecto de la reducción en la movilidad en 2020 por confinamiento y la inercia de una movilidad contenida en 2021.

**Tabla 5.** Porcentaje de gastos en transporte sobre renta disponible para hogares nucleares según tipo de hábitat. Serie 2011-2021.

	Zona densamente poblada	Zona intermedia	Zona diseminada	Total
2011	14,6	17,6	20,2	16,8
2013	14,5	16,7	19,1	16,3
2015	14,2	17,7	18,9	16,3
2016	14,5	16,5	18,2	16,0
2017	15,2	17,9	20,2	17,2
2018	14,4	18,1	19,5	16,7
2019	15,9	18,4	21,2	17,7
2020	10,2	12,5	14,5	11,8
2021	12,2	15,2	14,6	13,5

**Fuente:** Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. Elaboración propia.

Las diferencias que observamos y el valor absoluto sugieren la idea de lugares y áreas rurales de movilidad tensionada. En 2019 las familias con hijos residentes en áreas rurales soportaron una penalización de 1/3 sobre aquellas familias residentes en áreas urbanas (tabla 5). Se puede añadir el coste en tiempo, y se tendría la radiografía de las desigualdades de accesibilidad que experimentan los habitantes rurales.

## Interrogantes

El principal problema que sobrevuela sobre la población rural es la falta de reconocimiento de su situación vicaria en términos de ciudadanía en el acceso a las condiciones y servicios de bienestar. Sobre la población rural se proyecta un

imaginario de tradición, de agrarismo y de vida idílica que oculta la verdadera naturaleza del día a día de los habitantes de los pueblos, aldeas y lugares remotos. Unas veces se ha considerado que el problema de las áreas rurales es fundamentalmente de desarrollo económico —culpabilizando a sus habitantes del atraso— y se ha negado su reconocimiento como ciudadanos en igualdad de condiciones al bienestar. Otras veces se ha dado por supuesto que los habitantes rurales viven de la agricultura familiar —o que mayoritariamente desean hacerlo—. Y otras tantas se ha supuesto que simplemente por vivir en el medio rural se disfruta de una calidad de vida intrínseca y que los grandes problemas son los que padecen los habitantes urbanos.

La población rural merece una atención específica, además de por su número, por los fuertes desequilibrios y retos demográficos que enfrenta, por su elevada diversidad, pero también por la falta de diseño que tienen las políticas públicas para adaptarse a la realidad de la vida en lugares de baja densidad. (Sirva como ejemplo las dificultades para aplicar los criterios de alejamiento de agresores respecto a víctimas de violencia de género, o los requisitos de contratación pública que exigen la concurrencia de ofertas, que es solo posible en lugares grandes).

Al margen de las demandas específicas de servicios y atención que tiene la población rural, resulta claro que el modelo de baja densidad, que es el pilar de la riqueza ambiental, alimentaria y de diversidad patrimonial de nuestro país, no puede protegerse únicamente con medidas agrarias o ambientales. Nuestro modelo territorial necesita y demanda de políticas sociales específicas para el mundo rural, planificadas y bien dirigidas al propósito de preservar dicho modelo.

La mirada sobre la realidad puede llevarnos a diferentes reflexiones y a mostrar el olvido en el que se encuentran las poblaciones rurales. Desde una mirada de justicia social las políticas públicas deberían garantizar el derecho de residencia en lugares de baja densidad sin que ello suponga una merma de los estándares de vida ni una condición de ciudadan@s de segunda.

## Bibliografía

- MOLINA, M., HERNANDO, F. y PÉREZ, R. (2022): «Convergencia versus cohesión socioterritorial en España: la despoblación como reto». *Información Comercial Española, ICE: Revista de economía*: 9-25
- CAMARERO, L. y OLIVA, J. (2019): «Thinking in rural gap: mobility and social inequalities». *Palgrave Communications*, 5 (95): 1-7.
- CAMARERO, L., CRUZ, F., y OLIVA, J. (2016): «Rural sustainability, inter-generational support and mobility». *European Urban and Regional Studies*, 23(4): 734-749.

- CAMARERO, L., CRUZ, F., GONZÁLEZ, M., DEL PINO, J., OLIVA, J. y SAMPEDRO, R. (2009): *La población rural en España. De los desequilibrios a la sostenibilidad social*. Fundación La Caixa, Barcelona.
- CAMARERO, L. & SAMPEDRO, R. (2019): «Transnational rurality and depopulation: Recession and settle down in rural Castilla y León». *Economía Agraria y Recursos Naturales*, 19(1): 59-82.
- CAVESTANY, R. (1955): «Menos Agricultores y Mejor Agricultura». *Revista de Estudios Agrosociales*, 13: 7-34.
- DURKHEIM, E. (1982): *La división social del trabajo*. Madrid: Akal. (e.o. 1893):
- DEL MOLINO, S. (2016): *La España Vacía: viaje por un país que nunca fue*. Editorial Turner, Madrid.
- GRAMMONT, H. (2004): «La nueva ruralidad en América Latina». *Revista Mexicana de Sociología*, 66, núm. especial: 279-300.
- HOCHSCHILD, A. (2000): «Global Care Chains and Emotional Surplus Value». En Giddens T. y W. Hutton (Eds.) *On the Edge: Globalization and the New Millennium*. Sage Publishers, Londres. Págs. 130-146.
- KÜHN, M. (2015): «Peripheralization: Theoretical concepts explaining socio-spatial inequalities». *European Planning Studies*, 23(2): 367-378.
- MATEU, J. J. (2002): «Política Hidráulica e intervención estatal en España (1880-1936): una visión interdisciplinar». *Estudios Agrosociales y Pesqueros*, 197: 35-61.
- RODRÍGUEZ-POSE, A. (2017): «The revenge of the places that don't matter (and what to do about it)». *Cambridge Journal of Regions. Economy and Society*, 11 (1): 189-209.
- SEN, A. (2000): *Desarrollo y libertad*. Planeta, Barcelona.
- SERRES, M. (2007): Retorno al contrato natural. En Bindé, J. (Coord.) *Formemos la paz con la tierra: coloquios del siglo XXI: ¿cuál será el futuro del planeta y de la especie humana?* UNESCO.
- SOJA, E. (2010): *Seeking Spatial Justice*. University of Minnesota Press, Minneapolis.
- VELTZ, P. (1996): *Mondialisation, villes et territoires. L'économie d'archipel*. Presses Universitaires de France, París.
- WALLERSTEIN, I. (1974): *The modern world-system. Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century*. Academic Press, Inc, New York.
- WOODS, M. (2018): «Precarious rural cosmopolitanism: Negotiating globalization, migration and diversity in Irish small towns». *Journal of Rural Studies*, 64: 164-176.